

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

Dña Alicia Torija López, diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea, presenta la siguiente **PROPOSICIÓN NO DE LEY** que se acompaña para su debate ante el Pleno de la Cámara.

Madrid, 3 de octubre de 2022



Mónica García Gómez
Portavoz



Alicia Torija López
Diputada

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde octubre de 2020 más de 4.500 personas, de las cuales 1.800 son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ven afectados sus derechos diariamente en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana al no contar con un suministro regular y estable de energía eléctrica.

La falta de suministro eléctrico impide el desarrollo de las actividades más elementales: iluminación, calefacción, conexión a internet, uso de electrodomésticos, carga de baterías, higiene diaria, lavado -y desinfección- de la ropa, cocina y alimentación, lectura y estudio, etc. lo que afecta a las actividades básicas de la vida: nutrición, higiene, escolarización -ya obstaculizada en muchos casos-, e implica un aislamiento social aún mayor del que ya sufrían sus vecinas y vecinos.

Se trata de un problema de vulneración de derechos humanos, toda vez que la luz es considerada un suministro básico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suministro eléctrico como «un requisito previo para la buena salud» y el acceso a la energía se configura como elemento esencial para una vivienda digna, derecho fundamental reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A ello se suman las devastadoras consecuencias para la salud agravadas por la COVID-19 o la borrasca Filomena. Al respecto, el Equipo de Intervención con Población Excluida (EIPE) mencionaba en uno de sus informes que *“la falta de suministro eléctrico tiene un impacto sobre la salud a través del aumento de la mortalidad y de la incidencia de numerosas morbilidades tales como enfermedades cardiovasculares, reumatológicas, infecciones respiratorias, crisis de asma, problemas de salud mental, accidentes domésticos, caídas, o bajo peso al nacer, entre otras”*. La situación es tan grave que el 2 de enero del 2021, un anciano de 74 años falleció de parada cardiorrespiratoria debido a una hipotermia provocada por el frío intenso que venía padeciendo en su domicilio.

El informe del EIPE señala que el frío, la humedad y el moho debidos al acondicionamiento deficitario de las viviendas y a la ausencia de calefacción facilita la aparición de infecciones respiratorias, empeora el curso de enfermedades respiratorias crónicas e impiden el uso necesario de oxigenoterapia crónica domiciliaria o la ventilación no invasiva domiciliaria (CPAP). Por otra parte, el empleo de chimeneas u hogueras como alternativas aumentan el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono.

Se ven seriamente afectadas las personas que padecen diabetes ya que la falta de energía eléctrica empeora la calidad de la alimentación y porque la terapia con insulina precisa de una conservación entre 2º y 8ºC; las personas afectadas por enfermedades reumáticas; aumentan el nivel de dependencia y empeora los problemas de salud mental y los recién nacidos (en una población con un índice alto de natalidad) por la dificultad por una adecuada calefacción o por la interferencia de la oscuridad y falta de energía en la preparación del alimento mediante lactancia artificial.

Más de la mitad de las personas afectadas son niñas y niños en edad escolar. Niñas y niños que viven en un entorno con un alto índice de absentismo escolar, tal y como recoge el estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares en marzo de 2019 y confirman

los datos de la propia Comunidad de Madrid, actualmente existen 158 expedientes de absentismo abiertos en educación primaria y 57 en educación secundaria.

La situación de precariedad que atraviesan los miles de personas residentes en la Cañada Real es bien conocida por las autoridades de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid desde hace muchos años. El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado el 17 de mayo de 2017 por la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid, la Delegación del Gobierno en Madrid, y por los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid contemplaba como uno de sus objetivos principales adoptar medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida bajo el enfoque de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El anexo III del citado Pacto incluye el **compromiso de rehabilitar el suministro de luz al objeto de dignificar las condiciones de vida de los habitantes de Cañada** con un enfoque directo hacia los más vulnerables y la protección de la infancia.

Esta situación es particularmente grave en el **sector 6**, donde **viven en “situaciones extremas de vulnerabilidad social, de insalubridad y de carencia de los más elementales servicios y dotaciones urbanas”**, como se recoge en el convenio de colaboración suscrito el 11 de mayo de 2018 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el realojamiento y la integración social de las familias del sector 6 de la Cañada Real Galiana.

La Comunidad y Ayuntamiento de Madrid son responsables del realojo de la población del sector 6 en cumplimiento de este convenio, pero quedan todavía muchas familias por realojar. El retraso en este compromiso, sumado a la falta de soluciones para el problema del suministro eléctrico, aboca a estas familias a vivir una situación de verdadera emergencia humanitaria.

Por su parte, el Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid promover con “carácter de urgencia cuantas medidas resulten precisas para dotar de suministro eléctrico” e impulsar acciones que permitan realizar contratos de suministro individuales. Del mismo modo, ha llamado la atención sobre la utilización de la implementación del programa de realojos a modo de “excusa” para no dar soluciones al urgente problema de la privación del servicio eléctrico en la zona.

Ya en diciembre de 2020 un grupo de ocho expertos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) la ONU, entre los que se encuentran los relatores especiales sobre la vivienda adecuada, de las personas con discapacidad, del derecho a la alimentación, a la educación y al agua potable, sobre cuestiones de las minorías, sobre los migrantes, sobre los derechos de las minorías, y sobre la extrema pobreza, entre otros, llamaban a la toma de acciones inmediatas respecto a los cortes de luz prestando especial atención a los graves efectos que esto tiene en la salud, alimentación, agua, saneamiento y educación de niñas y niños afectados, señalando, además, que la Cañada Real *“necesita urgentemente el apoyo del Gobierno para lograr unas condiciones de vida adecuadas, y no ataques verbales que provoquen la hostilidad pública.”*

Muchas otras entidades sociales nacionales e internacionales, públicas y privadas, han pedido la solución urgente de esta situación, incluido el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil y el Arzobispo de Madrid. El New York Times ha llegado a comparar la situación de Cañada Real con la de los campos de refugiados bosnios y el diario The Guardian habla de: “esto es el infierno”.

Los habitantes de Cañada Real, a través de sus asociaciones de vecinos, han manifestado en repetidas ocasiones la necesidad urgente de restablecimiento del suministro eléctrico, la celebración de contratos y la constitución de un órgano de seguimiento para el cumplimiento concreto del Anexo III del Pacto Regional. Hace un año se creó la Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real integrada por más de 50 asociaciones de toda índole para exigir a las administraciones la garantía de los derechos de los habitantes de la zona y cuyos objetivos pretenden poner solución por la vía jurídica y de la movilización a este problema.

En consecuencia, entendemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe actuar de manera inmediata haciendo ejercicio de sus atribuciones y coordinando las acciones que sean necesarias para dar soluciones duraderas para el acceso al suministro estable de energía eléctrica y a una vivienda digna y adecuada para las miles de personas en condiciones de vulnerabilidad en la Cañada Real Galiana, y por todo el grupo parlamentarios de Más Madrid propone la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

- 1.- Adoptar de manera inmediata una solución estable y duradera para devolver el suministro eléctrico a las familias residentes en la Cañada Real Galiana, como se recoge en el Pacto Regional, poniendo todos los medios materiales y humanos necesarios para ello en colaboración con las restantes administraciones públicas y la empresa suministradora.
- 2.- Disponer los medios alternativos necesarios para que todas las familias afectadas tengan acceso cuanto antes a la energía, mediante la instalación de generadores, placas fotovoltaicas o cualquier otro sistema alternativo, mientras se ejecuta el punto primero y de manera simultánea a la ejecución de los realojos.
- 3.- Facilitar los acondicionamientos necesarios para el acceso a contratos normalizados de suministro eléctrico de las familias de residentes en Cañada Real.
- 4.- Constituir una mesa de seguimiento que incluya como interlocutor válido a la Plataforma Cívica por la Luz en Cañada Real, al resto de administraciones competentes en la materia así como al resto de actores implicados.
- 5.- Dotar al Pacto Regional para la Cañada Real Galiana con medios económicos y materiales suficientes y adecuados para poder ejecutar cuanto antes los objetivos y líneas de actuación incluidas en dicho Pacto:
 - a) Regularización de la situación patrimonial y urbanística de los sectores que componen la Cañada Real Galiana, basada en los principios de legalidad, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.
 - b) Medidas urgentes para salvaguardar la integridad, salubridad e integración de la población más desfavorecida.
 - c) Llevar a cabo los compromisos alcanzados en materia de realojo de las familias acortando los plazos y bajo los principios del derecho a la vivienda digna.